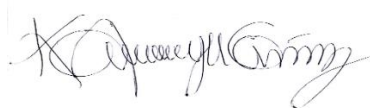


Constancia:

Sra. Magistrada: Le informo que, el día 23 de marzo de 2023, me comuniqué telefónicamente al abonado número 312 216 55 96, que corresponde al de la accionante IRLIS DEL CARMEN MESTRA DORIA, en orden a constatar si había obtenido respuesta al derecho de petición planteado. La accionante me informó que, a la fecha no ha recibido contestación por parte de la UNIDAD DE VICTIMAS.



Karen ViViana Anaya Gómez
Auxiliar Grado I



Medellín, veintitrés (23) de marzo del año dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, la **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN** procede a resolver por vía de Consulta la sanción impuesta dentro del Incidente de Desacato propuesto por la señora IRLIS DEL CARMEN MESTRA DORIA, contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS, con Rdo. 05-001-31-05-020-2023-00040-01.

La Magistrada de conocimiento, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto, y a continuación, la Sala, previa deliberación del asunto, aceptó el presentado por la ponente, el cual se traduce en la siguiente decisión:

La señora IRLIS DEL CARMEN MESTRA DORIA, promovió acción de tutela, en la que el 15 de febrero de 2023, el JUZGADO VEINTE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, amparó su derecho fundamental de petición y, mediante sentencia de tutela, ordenó a la UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS:

“(...) SEGUNDO: ORDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS - UARIV, que en el término de quince (15) días, siguientes a la notificación de esta providencia, brinde una respuesta de fondo, clara y precisa al escrito de petición allegado por la actora, en la

que se le indique si hay lugar o no al reconocimiento y pago de la reparación administrativa por la desaparición del señor GENARO MANUEL MESTRA PEREZ y, se ponga en conocimiento de la solicitante lo decidido en la dirección indicada para ello en el derecho de petición y escrito de tutela (...)

Toda vez que la entidad no dio cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado, la accionante, inició incidente de desacato, y mediante providencia interlocutoria del 21 de marzo de 2023, el juzgado de instancia, dispuso:

PRIMERO: SANCIONAR a la Dra. CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES en su condición de Directora de Reparaciones Administrativas de la UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMA o a quien haga sus veces, con MULTA de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes al día de su pago, que deberá consignar de su PROPIO PECULIO dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión en el Banco Popular No. 110-0050- 00118-9 o Banco Agrario de Colombia S. A. No. 3- 0070-000030-4, denominada DTN - MULTAS Y CAUCIONES EFECTIVAS, a favor del Consejo Seccional de la Judicatura. De no cancelarse oportunamente la multa impuesta, se procederá conforme al parágrafo del artículo 20 de la Ley 1285 de 2010.

SEGUNDO: OFICIAR a la Fiscalía General Nación, para que se investigue penalmente la conducta omisiva en que ha incurrido la Dra. CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES, conforme se anunció en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: OFICIAR a la Doctora PATRICIA TOBON YAGARI como Directora general de la UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMA BENAVIDES y superior jerárquico de la sancionada, para que le informe a este Despacho judicial el estado en que se encuentra el proceso disciplinario contra la Dra. CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES, y las medidas que ha adoptado para que se cumpla el fallo de la acción de tutela objeto de este pronunciamiento, para lo cual se le concederá el termino de tres (3) días contados a partir de la notificación del presente auto, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas por el Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: Notifíquese lo decidido a través de un medio expedito que asegure su eficacia a los sujetos participantes en este incidente.

QUINTO: CONSÚLTESE lo decidido al Superior en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, para lo cual se remitirá este expediente al Honorable Tribunal Superior de Medellín Sala Laboral.

Conoce el Tribunal por el grado jurisdiccional de consulta previsto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, y cumplido el trámite de rigor se procede a decidir lo pertinente previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

Con relación al procedimiento adelantado por el juez constitucional, esta sala advierte que el mismo garantizó el derecho de contradicción y defensa de la entidad accionada, ya que se cumplieron a cabalidad los respectivos pasos y notificaciones (auto del 02 de marzo de 2023 —PDF 2 requiere, auto del 08 de

marzo de 2023 – PDF 4 requiere por 2 vez – auto del 14 de marzo de 2023 PDF 06 apertura del incidente- auto del 21 de marzo de 2023- PDF 08 sanción)

Ahora, el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, por medio del cual se reglamenta la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de nuestra Constitución Política, consagra una sanción, para aquel que incumpla la orden proferida por medio de una acción de tutela, sanción que es impuesta por el Juez que profirió la sentencia y que consiste en arresto hasta de seis meses y multa de veinte salarios mínimos mensuales, sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. Dicha norma es del siguiente tenor:

“...La persona que incumpliére una orden de un juez, proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de veinte salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.

“La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la decisión. (La consulta se hará en el efecto devolutivo)”. (La frase entre paréntesis, declarada inexecutable por la Corte Constitucional en sentencia C-243 de 1996. M. P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa).

Sobre el cumplimiento de las tutelas ha manifestado reiteradamente la H. Corte Constitucional que el acatamiento de la orden de tutela recae en el Juzgado o Tribunal que se pronunció en primera instancia, conservando la competencia hasta tanto se restablezca el derecho vulnerado.

Cabe señalar que, para determinar si es procedente imponer una sanción por incumplimiento a un fallo de tutela, debe acreditarse la responsabilidad subjetiva del sujeto destinatario de la orden contenida en la parte resolutive del fallo, para lo cual la Corte Constitucional ha indicado que el ámbito de acción del juez, está definido por la parte resolutive del fallo correspondiente, siendo su deber verificar: i) a quien estaba dirigida la orden; ii) Cuál fue el término otorgado para ejecutarla; iii) el alcance de la misma . Esto, con objeto de concluir si el destinatario de la orden la cumplió de forma oportuna y completa (conducta esperada)

En el presente asunto no hay duda que el JUZGADO VEINTE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, actuando como juez constitucional amparó los

derechos fundamentales de la accionante IRLIS DEL CARMEN MESTRA DORIA, y ordenó a la UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS, dar respuesta de fondo, clara y precisa al escrito de petición allegado por la actora.

En cuanto al cumplimiento al fallo de tutela, esta sala resalta que la señora IRLIS DEL CARMEN MESTRA DORIA, presentó el incidente de desacato el 28 de febrero de 2023 (PDF 01 folio 2) y de acuerdo a la constancia que precede, aún no ha recibido respuesta al derecho de petición.

Así las cosas, es innegable que la entidad accionada se mantiene en incumplimiento al fallo de tutela referido, desacatando la orden del juez constitucional y vulnerando el derecho fundamental de petición de IRLIS DEL CARMEN MESTRA DORIA.

En consecuencia, se **CONFIRMARÁ** la sanción de multa impuesta en auto del 21 de marzo de la presente anualidad, proferida por el JUEZ VEINTE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, frente al encargado del cumplimiento del fallo de tutela, al evidenciarse que el incumplimiento, se mantiene y no se ha superado la situación.

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN,**

RESUELVE

Primero. -CONFIRMAR íntegramente la providencia que se conoce en Consulta, proferida por el JUEZ VEINTE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, el 21 de marzo de 2023, a través de la cual sancionó con multa a la doctora CLELIA ANDREA ANAYA BENAVIDES en su condición de Directora de Reparaciones Administrativas de la UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMA, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

Segundo. - NOTIFÍQUESE esta decisión a las partes por el medio más expedito, como lo ordena el Decreto 2591 de 1991, artículos 16 y 30.

Déjese copia de lo actuado en la secretaría de la Sala y procédase como se dejó indicado. Se dispone la devolución del expediente al juzgado de origen para su archivo.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma en constancia

Los Magistrados,


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA


MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
Estados N ° **051 del 24 de MARZO de 2023.**

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>